



Sordos, población invisible de San Andrés

Solo 100 de las 100.000 personas sordas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina utilizan el lengua de señas como medio de comunicación. Un estudio realizado con 15 personas en situación de discapacidad auditiva entre 13 y 60 años evidenció que esta lengua no es reconocida en la isla, lo cual dificulta su inclusión social.

El pupitre de Ramzi está ubicado en la parte trasera del salón y cada día le pide ayuda a un amigo para que le preste sus cuadernos y, así, tomar los apuntes de clase. Su rutina es el resultado de la indiferencia con la que es tratado en el colegio, pues los docentes desarrollan sus actividades en español y no realizan ajustes para los hablantes de otras lenguas, incluida la de señas.

Aunque los compañeros del menor de 11 años, son conscientes de la dificultad auditiva y las limitaciones para lograr comunicarse, prefieren aislarlo y se refieren a él como la persona que “no habla”. Incluso, algunos han llegado a agredirlo físicamente.

Hasta aquí, la historia de Ramzi podría ser la de cualquier niño con esta deficiencia. Sin embargo, la situación es más compleja, pues cursa sexto de bachillerato en un colegio público de San Andrés con aproximadamente 40 alumnos, de los cuales el 90 % habla creole (lengua raizal) y los demás, español.

La lengua de señas no es reconocida por los hablantes del archipiélago como un sistema estructurado que cumple una función comunicativa. Así lo evidenció Maureen Hooker O’neill, magíster en Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia (UN) Sede Caribe, tras compartir durante seis meses el día a día de 15 personas, entre los 13 y 60 años, consideradas sordas por la Confederación Nacional de Sordos de Colombia, es decir, quienes tienen una pérdida auditiva mayor a 90 decibeles y por su condición clínica es improbable que puedan adquirir una lengua oral.

“El estudio evidenció que son una comunidad distinta, tienen una lengua de señas nativa propia que debería usarse. Les ponemos audífonos, trabajamos con sus familias y los entes territoriales, además de buscar que se integren a la sociedad e instruirlos en los colegios, pero hasta ahora todo ha fracasado porque su lengua no es tenida en cuenta”, enfatiza la también fonoaudióloga Hooker O’neill.

El estudio adelantado por la magíster es el primero centrado en esta comunidad de 100.000 pobladores, entre los cuales el 70 % son continentales, es decir, los colombianos que viven en el continente; el 25 % corresponde a raizales hablantes de creole; el 5 %



agrupa personas que se comunican en inglés y solo un 0,5 % emplea la lengua de señas, según el censo más reciente.

Abusados lingüísticamente

Las personas contactadas para el estudio provienen de familias raizales multilingües (hablantes de creole, español e inglés) y residentes en sectores tradicionales como Elsy Bar, San Luis Gough, Sound Bay, Platform y Mission Hill, en San Andrés y Bottom House, Free Town y Old Town, en Providencia.

Dentro de los aspectos estimados se indagó sobre el lugar de residencia, la configuración familiar (si vivían con sus padres y si estos eran separados), el tipo de participación en los diferentes escenarios (el colegio, el trabajo o la iglesia). Además, en entrevistas individuales ofrecieron información sobre sus gustos y aficiones.

Así, la magíster Hooker constató que los hablantes obligan a los sordos a acoplarse a su lengua. Ni siquiera los familiares son conscientes de que las señas que utilizan forman parte de su lengua. A esto se suman las escasas oportunidades en el ámbito laboral, pues solo acceden a trabajos que no exigen capacidades intelectuales o cognitivas, por ejemplo se dedican a ser vigilantes o cuidadores de carros.

De hecho, las personas sordas de mayor edad consideran su estado auditivo como una enfermedad y no reconocen la lengua de señas como aquella con funciones similares a las orales, que les pudiera ayudar en la vida, así como tampoco los demás elementos de su cultura. La mayoría son personas solteras que viven con su grupo familiar y dependen económicamente de ellos.

Esta situación, afirma la magíster, es consecuencia de la poca educación que reciben, ya que en las instituciones educativas no hay infraestructura necesaria, ni políticas de inclusión, tampoco recurso humano capacitado para atender esta población.

La investigación comprobó que en los entes académicos y de registro no existen estudios realizados en el archipiélago sobre esta comunidad. Según la Oficina de Atención a Discapacitados de la Secretaría de Educación Departamental, alrededor de 50 niños están vinculados al programa de inclusión al aula, pero no poseen registros sobre las acciones pedagógicas y sociales que posibiliten la inclusión educativa y social en edad escolar. Por otro lado, la Secretaría de Salud reporta que existen 23 personas sordas con un rango de edad de entre 20 y 44 años.

Sin apoyo institucional

Otro aspecto por destacar es la falta de instituciones donde las personas con discapacidad auditiva puedan adquirir una lengua de señas estructurada. Esto se debe a que, por un



Sala de Prensa

lado, estas personas y sus familias no poseen una red institucional de apoyo y tienen poco contacto entre sí, puesto que viven en diferentes sectores de las islas.

De igual manera, los padres de familia que participaron en el estudio no han sido formados en este sistema lingüístico como segunda lengua, de manera que puedan transmitirla a sus hijos en situación de discapacidad auditiva.

Adicionalmente, en la isla hacen falta nativos en lengua de señas que sirvan como modelos pedagógicos para el proceso de enseñanza. “Al no tener instituciones gubernamentales ni privadas con adecuada información académica, estas personas estarán en desventaja, marginalizadas, abusadas lingüísticamente y explotadas laboralmente”, advierte.

Mejorar las condiciones de esta población implica el fortalecimiento de las herramientas usadas por los entes oficiales para recolectar información de las personas que padecen una pérdida auditiva en el archipiélago. “El proceso es limitado y los datos obtenidos no coinciden con la realidad de este grupo social. Si bien existe un programa de discapacidad en la Secretaría de Salud que facilita ayudas técnicas, no ofrece la cobertura suficiente porque la cantidad de casos registrados es mínima”, precisa.

También, es importante que el sistema público escolar reconozca a estas personas como un grupo étnico minoritario e implemente estrategias que logren la integración de estos factores dentro del plan escolar y desarrolle medidas de inclusión.

Diario UN Periódico, 22 Octubre de 2016. Página 17